

Ecología y democracia discursiva: más allá del capitalismo liberal y del estado administrativo

John S. Dryzek¹

INTRODUCCIÓN

Actualmente, cualquier enfoque económico político con credibilidad debe asumir el reto presentado por los problemas ecológicos. «El medio ambiente» no puede ser concebido como

un tema más entre muchos. Los problemas ecológicos están ampliamente difundidos y son suficientemente graves como para constituir una prueba decisiva para las actuales y futuras situaciones políticas y económicas, y para todos los procesos de reconstrucción institucional, sean reformistas o revolucionarios. En este capítulo, argumentaré que las instituciones dominantes contemporáneas fracasan en este examen, y más aún, que la resultante confusión y contradicción abre un espacio para alternativas democráticas y discursivas, las cuales prometen mayores posibilidades de enfrentarse de manera efectiva al reto ecológico.

En vez de presentar una exhaustiva taxonomía y una evaluación de los mecanismos y procesos institucionales existentes,² me concentraré en las actuales instituciones dominantes del mundo occidental y en sus posibles sustituciones. Aquellas pueden ser caracterizadas en términos de un nexo del capitalismo, la democracia liberal, y el estado administrativo o la burocracia estatal. La pregunta inicial es: ¿Hasta qué punto pueden estas tres instituciones, de manera aislada o combinada, enfrentarse al reto ecológico?

Argumentaré que estas instituciones resultan completamente ineptas cuando abordamos la temática ecológica, que cualquier combinación entre ellas sólo puede agravar los problemas y que su única virtud está en las posibilidades de su propia transformación. Tal juicio sumario conduce al estudio de esas posibilidades de transformación. Intentaré determinar algunas estructuras políticas y económicas nacidas del conflicto entre el orden institucional y las demandas ecológicas. Adicionalmente, consideraré el tipo de democracia que la era de la ecología permite y requiere, suponiendo que realmente la democracia y la ecología sean compatibles.

¹ Profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Oregon. Una anterior versión de este artículo fue presentada en el Seminario de Ecología del Comité de Economía Política de la Buena Sociedad en la Reunión de la Asociación Americana de Ciencias Políticas, San Francisco, 1990. Estoy agradecido por los extensos comentarios y críticas de otros participantes del mencionado seminario —James O'Connor, Robert Paehlke, Kenneth Peter y Langdon Winner— y también a Hal Aronson por su ayuda a nivel editorial. Este artículo fue publicado en inglés en CNS 3(2), número, 10, Junio de 1992, pp. 18-42.

² Por ejemplo, John S. Dryzek, *Rational Ecology: Environment and Political Economy* (Oxford: Basil Blackwell, 1987).

EL CAPITALISMO

En la actualidad el capitalismo presenta un rostro ecológicamente «amistoso». Por ejemplo, Weyerhaeuser es «la empresa donde los árboles crecen» y no «la empresa que hace tala rasa del bosque primario», actividad a la que anteriormente se dedicaba. Proctor y Gamble adjuntan un panfleto ambientalista (impreso en papel no reciclable) en los paquetes de sus pañales desechables. Los publicistas de las empresas occidentales anuncian los beneficios que se generarán en los países terriblemente contaminados como Polonia y la ex Alemania del Este, una vez que se instalen plantas manufactureras modernas. El apoyo intelectual proviene de aquellos que sostienen que el mercado es el mejor mecanismo para satisfacer las necesidades individuales —incluyendo la demanda de los «bienes ecológicos». Los neoconservadores que están contra la regulación, los nuevos economistas de los recursos naturales, y los intelectuales cornucopianos defensores del libre mercado enfatizan las virtudes de la privatización y la descentralización en la economía política ambientalista.³

En la realidad resulta cuestionable la racionalidad ecológica del capitalismo monopolista o de mercado. El argumento ecológico en contra del capitalismo puede ser resumido de la siguiente manera: en primer lugar, el capitalismo requiere de crecimiento económico, en su ausencia se reduce la inversión conduciendo a un declive económico general. Sin crecimiento, el capitalismo debe enfrentar la distribución desigual, el desempleo, y la inestabilidad política. En ese sentido, no resulta sorprendente que los gobiernos de las economías capitalistas consideren como su principal preocupación la promoción del crecimiento.

Si existieran límites ecológicos al crecimiento, éste debería cesar en un punto determinado. Los defensores de la economía de mercado niegan este argumento sobre la base de que nuestra tierra es infinita; el mecanismo de los precios asegurará la localización de sustitutos para cualquier tipo de recurso escaso.⁴ Este feliz resultado puede lograrse para ciertos recursos específicos —por ejemplo cuando en el siglo XIX se agotó el aceite de ballena los sustitutos fueron fácilmente ubicados. No obstante, no existe un sustituto para la capacidad asimilativa de la biosfera. Aun cuando una fuente de abun-

dante e ilimitada energía barata (¿fusión fría?) pueda ser usada para convertir la naturaleza degradada en naturaleza útil (por ejemplo, concentrando recursos dispersos) no existe una salida posible a esta restricción. El uso actual de energía está amenazando con calentar nuestro planeta más allá de límites tolerables a causa del aumento del efecto invernadero. Existe una oferta limitada de baja entropía u orden en este planeta, y la cual el capitalismo no hace más que degradar.⁵ Sin embargo, resulta difícil obtener pruebas convincentes al respecto. No disponemos de indicadores de la situación global o del nivel de entropía de la biosfera. La evidencia sobre el estado de determinados recursos o de los sumideros ecológicos puede resultar engañosa, dadas las posibilidades de sustitución. La única alternativa sería que el capitalismo pudiera reorientar su crecimiento hacia actividades económicas que no involucren el consumo de materiales, o de servicios ambientales o ecológicos. En la medida en que el capitalismo se transforma en un capitalismo informacional —centrado en la producción, intercambio, y la difusión de información antes que la producción de bienes materiales— su crecimiento podría parecer menos destructivo ecológicamente. No obstante, las sociedades que transitan hacia la era de la información no han eliminado el crecimiento material. Sus niveles de consumo material continúan incrementándose, aunque consiguen "exportar" los daños ecológicos a otras sociedades. Las recientes mejoras locales de carácter medioambiental, tales como un aire más limpio en Pittsburgh no deben de ser entendidas como éxitos generales.

En segundo lugar, el capitalismo ignora y se desentiende del futuro. Sin las tasas de interés, el capital sería gratuito y el capitalismo sería inconcebible. La existencia de tasas positivas

³ Ver John S. Dryzek y James P. Lester «Alternative Views on the Environmental Problematic», en James P. Lester, editor, *Environmental Politics and Policy, Theories and Evidence* (Durham, N.C.: Duke University Press, 1989), pp. 320-322.

⁴ Por ejemplo, Julian Simon, *The Ultimate Resource* (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1981), pp. 15-27.

⁵ Nicholas Georgescu-Roegen, «Energy Analysis and Economic Valuation», *Southern Journal of Economics*, 45, 1979.

LA DEMOCRACIA LIBERAL

de interés, significa que los individuos del mercado deben infravalorar costos y beneficios futuros de acuerdo a la prevalente tasa de interés. Cuanto más alta sea la tasa, las consecuencias o resultados a largo plazo generan menos preocupación dentro del sistema.

En tercer lugar, en tanto sistemas descentralizados, gestionados por una lógica de interés individual, los mercados carecen de mecanismos adecuados para abordar los problemas que generan a los bienes públicos. Los individuos orientados al beneficio privado se despreocupan por los daños causados a terceras personas no directamente involucradas en las transacciones comerciales y, menos aún, a los recursos ambientales que carecen de precios. La racionalidad instrumental de los actores motivados por obtener ganancias materiales en un ambiente social no regulado destruirá los recursos colectivos. Este comportamiento resulta no sólo funcional para el desarrollo de las economías capitalistas sino también necesario para aquellos individuos que desean prosperar en los referidos sistemas.

Existen ejemplos de reestructuración de los derechos de propiedad con el objetivo de otorgar a cada persona una porción de propiedad en los antiguos bienes públicos, la regulación del acceso a los recursos y el control de prácticas ambientales dañinas tales como la contaminación. Pero tal tipo de reglamentación requiere de la acción gubernamental. Intentos recientes para enfrentar el deterioro de la capa de ozono, el calentamiento global y otros problemas, han ocurrido dentro del marco político. El capitalismo desplaza hacia el gobierno los problemas medioambientales que él mismo generó, pero que no puede resolver. Sin embargo, los gobiernos de sistemas mixtos políticoeconómicos capitalistas no serán capaces de responder de manera efectiva, por las razones que a continuación analizaré.

La democracia liberal puede ser definida en términos de la competencia electoral por los cargos políticos, la oportunidad para ejercer presión popular sobre el gobierno a través de la libre asociación, un conjunto de derechos individuales frente a la actividad gubernamental garantizados a través de restricciones constitucionales, y una política de búsqueda de intereses estratégicos, concebidos al interior de la esfera privada. Durante los últimos veinte años se ha logrado más progreso en el tratamiento de los problemas ambientales en las democracias liberales que en países con otro tipo de sistemas políticos. Ello ha sido realizado a través del conocido mecanismo político de grupos de interés. Los ambientalistas han participado en el juego de los grupos de interés, y como resultado se han obtenido leyes referidas al medioambiente. Resulta indudable que la democracia liberal resuelve los problemas ecológicos de manera más efectiva que el sistema de mercado con el cual coexiste, el cual traslada a la democracia liberal los problemas ambientales que provoca pero no resuelve. No obstante, el fracaso de la democracia liberal para enfrentarse a los problemas energéticos de los años setenta, las dificultades con respecto a los residuos nucleares y el continuo bloqueo de solución respecto a los bosques milenarios del oeste de Estados Unidos, sugieren que existen límites en la capacidad de resolución de problemas por parte de la democracia liberal. Estas limitaciones se pueden agrupar en cuatro aspectos fundamentales.

En primer lugar, la distribución del poder en los sistemas democráticos resulta desigual. Los sectores empresariales siempre poseen una posición privilegiada por su disponibilidad de recursos financieros y porque las autoridades gubernamentales requieren de la cooperación empresarial para la ejecución de sus políticas.⁶ Además existe el miedo gubernamental a la posible contracción en las inversiones en caso de ejecutarse medidas en contra de la empresa privada.⁷ Resulta lógico que los sectores empresariales presionen constantemente a favor de políticas favorables para sus propios intereses antes que a los requerimientos ecológicos. Las corrientes de la opinión pública preocupadas por los valores intrínsecos del medioambiente, tales como la que

⁶ Charles Lindblom, *Politics and Markets: The World's Political-Economic Systems* (New York: Basic Books, 1977).

⁷ Fred Block, "The Ruling Class Does Not Rule: Notes on the Marxist Theory of the State". *Socialist Revolution*, 33, 1977; Charles Lindblom, "The Market as Prison." *Journal of Politics*, 44, 1982.

en Estados Unidos alcanzó su apogeo el Día de la Tierra en 1990, se desmoronan cuando amenazan a los intereses empresariales. En las elecciones generales de noviembre de 1990 se observó que las iniciativas ambientalistas fracasaron de manera contundente como resultado de las campañas públicas organizadas por los sectores empresariales, quienes anunciaron que dichas iniciativas reducirían el número de puestos de trabajo.

En segundo lugar, las democracias liberales desagregan los problemas ambientales según los intereses particulares de los sectores afectados. La suma de esos intereses no alcanza el interés ecológico general de la sociedad en su conjunto, a pesar de que algunos de ellos poseen una genuina orientación ecológica. La espectacular confusión generada durante los años setenta, en el interior de la democracia liberal norteamericana, como resultado de la crisis energética demuestra que los grupos de interés pueden actuar agresivamente e impedir una actividad política coherente.

En tercer lugar, la «remuneración» política de la democracia liberal consiste en otorgar compensaciones tangibles a determinados grupos de interés. A pesar de que eso puede ser funcional en términos de la distribución de los costos y beneficios de la actividad gubernamental, resulta inútil cuando se trata de enfrentarse a grandes e indivisibles problemas ecológicos.

En cuarto lugar, el horizonte temporal en la democracia liberal usualmente no es más duradero que el correspondiente al mercado. Los problemas a corto plazo son los que reciben la mayor atención y los próximos procesos electorales son los que normalmente fijan los límites políticos temporales. Ocasionalmente, algunos proyectos que prometen beneficios económicos a largo plazo son financiados —por ejemplo la investigación sobre la fusión. Sin embargo, ello no es resultado de una adecuada previsión sino que cumple el objetivo de apaciguar a determinados grupos de interés, que de manera inmediata se benefician financieramente de dichos proyectos.

En quinto lugar, la democracia liberal, no menos que el mercado, es adicta al crecimiento económico. Si el crecimiento se detiene, ese unguento o disolvente político no está disponible y las desigualdades distributivas resultan más evidentes.⁸ Este miedo a la recesión económica significa que las de-

mocracias liberales son prisioneras del imperativo del crecimiento económico.⁹

EL ESTADO ADMINISTRATIVO

La típica política contemporánea consiste en una difícil yuxtaposición de democracia liberal y estado administrativo. La administración funciona de acuerdo a la lógica de la racionalidad instrumental, mientras que la lógica democrática liberal se basa en procesos políticos e interactivos. Los procesos estatales administrativos afirman un tipo de racionalidad ecológica que incorpora un propósito colectivo, un conocimiento neutral, la capacidad de otorgar sentido a los problemas complejos y la voluntad y la autoridad para generar soluciones a dichos problemas —si es necesario en contra de la voluntad de intereses recalcitrantes que contaminan el medioambiente.¹⁰ Un gobierno central fuerte resulta atractivo para diversos analistas ambientales, incluyendo los ecólogos hobbesianos,¹¹ los reformistas estructurales con una perspectiva de gestión ambiental,¹² los socialistas planificadores,¹³ los conservadores burkeanos que desearían una masiva restricción, inculcada por una élite culta, de la demanda de bienes ecológicos.¹⁴

Sin embargo, los sistemas estatales administrativos se encuentran también prisioneros como explicamos a continua-

⁸ Daniel Bell «The Public Household: On Fiscal Sociology and The Liberal Society», *Public Interest*, 37, 1974, p. 43.

⁹ Lindblom, *Politics and Markets*, *op. cit.*

¹⁰ Douglas Torgerson y Robert Paehlke, «Environmental Administration: Revising the Agenda of Theory and Practice», en Robert Paehlke y Douglas Torgerson, editores, *Managing Leviathan: Environmental Politics and the Administrative State* (Peterborough, Ontario: Broadview, 1990).

¹¹ Garret Hardin, «The Tragedy of the Commons», *Science*, 162, 1968; Robert L. Heilbroner, *An Inquiry into the Human Prospect: Updated and Reconsidered for the 1980s* (New York: W.W. Norton 1980).

¹² Lynton K. Caldwell, «Environmental Quality as an Administrative Problem», *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 400, 1974, pp. 103-115.

¹³ Hugh Stretton, *Capitalism, Socialism and the Environment* (Cambridge: Cambridge University Press, 1976).

¹⁴ Williams P. Ophuls, *Ecology and the Politics of Scarcity* (San Francisco: W. H. Freeman, 1977).

ción. En primer lugar, están limitados en su capacidad de respuesta a los diversos problemas planteados. El cumplimiento por parte de los burócratas de las metas establecidas en la cumbre de la jerarquía está lejos de ser automático, obstruyendo de esta forma la afirmación del interés colectivo. Más aún, las organizaciones burocráticas sólo pueden ser programadas para realizar una limitada gama de rutinas, las cuales difícilmente pueden ser adecuadas frente a los variados y complejos problemas ambientales. Así como los militares siempre están preparados para luchar en la última guerra, las agencias burocráticas no modificarán el sentido y lógica institucional de su existencia simplemente adjuntando instrucciones ecológicas a sus respectivas directivas o mandatos. Los planes quinquenales en la ex Europa del Este incorporaron regularmente metas ambientales pero sin ningún efecto práctico. Grandes y centralizadas instituciones generan grandes y centralizadas soluciones a los problemas. Por ejemplo, las agencias locales, estatales y federales del gobierno norteamericano ubicadas en las regiones occidentales responden a las condiciones de sequía con medidas cada vez más extravagantes para transvasar agua de regiones distantes, sin considerar otras formas más apropiadas de distribución de la población y de las actividades económicas. Adicionalmente, el carácter jerárquico de las organizaciones significa que cualquier fracaso o mala interpretación en cualquier punto de la cadena administrativa puede resultar devastador. Una creciente literatura de ciencias políticas referida a la ejecución de políticas, demuestra que una implementación exitosa suele ser la excepción antes que la regla, y en cuestiones ambientales no menos que en cualquier otro tema.

En segundo lugar, la racionalidad administrativa no puede enfrentarse con problemas verdaderamente complejos. La desagregación de problemas, a través de la división administrativa del trabajo, significa que diversos aspectos de problemas complejos son artificialmente separados unos de otros. Como consecuencia, las acciones que se presentan como soluciones desde la perspectiva de una subunidad administrati-

va, en la realidad significan el desplazamiento de los problemas hacia otros sectores. Por ejemplo, ello ocurre cuando se limpia un depósito de desechos tóxicos y se traslada su contenido a otro lugar. Por ejemplo, la Agencia de Protección Medioambiental «resuelve» el problema de la contaminación del aire ordenando la ubicación del contaminante en un sedimento tóxico fangoso. Puede haber desplazamiento no sólo en el espacio o de un medio a otro sino también en el tiempo; ello sucede cuando los desechos nucleares que se caracterizan por una vida prolongada son ubicados en subterráneos.

La desagregación de los problemas burocrático administrativos también perjudica la pretendida neutralidad profesional de los burócratas. En efecto, las diferentes unidades administrativas incluyen distintos tipos de especialistas profesionales con valores divergentes. Por ejemplo, la administración de los antiguos bosques de la región del Pacífico Noroeste provoca enfrentamientos entre dos instancias del Departamento de Interior. El Servicio de Pesca y Vida Silvestre es sensible a la diversidad ecológica y es responsable de haber registrado el conocido búho manchado en la lista de especies en peligro. Por el contrario, la Oficina de Manejo de Tierras es más afín con las actividades comerciales madereras en los territorios que controla.

En tercer lugar, los sistemas jerárquicos necesariamente obstruyen la libre circulación de información, aspecto que es esencial para la solución efectiva de los problemas no rutinarios. Tal como ocurre en otros ámbitos administrativos, en el caso de los problemas ecológicos no existe la verificación empírica indiscutible. Los esquemas teóricos que se manejan en la pirámide de la estructura administrativa, siempre se equivocan en mayor o menor grado. No obstante, el sistema jerárquico desarrolla resistencias frente a la institucionalización del sistema de prueba y error, modalidad que resulta necesaria para este tipo de circunstancias. El arquetipo de una comunidad científica que resuelva problemas suele ser descentralizado, de tal forma que los argumentos racionales predominan sobre la autoridad jerárquica.¹⁵ El sistema jerárquico puede resultar apropiado para la ejecución de tareas rutinarias, pero no para la resolución de variables y complejos problemas.

Todo lo que queda del discurso administrativo respecto

¹⁵ Karl R. Popper, *The Open Society and its Enemies* (London: Routledge and Kegan Paul, 1966)

a la racionalidad ecológica es su innegable voluntad y autoridad para imponer soluciones. Mis argumentos sugieren que aquellas políticas que son impuestas rara vez contribuirán a la mejora de la crisis ambiental.

LA COMPLEJIDAD DE LOS ERRORES

El capitalismo, la democracia liberal y el estado administrativo no existen de manera aislada, y por lo tanto no deben ser evaluadas sin tener en cuenta sus interacciones. Uno puede imaginarse diversas combinaciones. Por ejemplo, según Paehlke, la capacidad estatal para asumir perspectivas a largo plazo podría combinarse con la relativa apertura de la democracia liberal hacia la presión popular para producir resultados imposibles en estructuras aisladas. Ello ocurriría a través del consenso popular respecto a ciertos valores ecológicos, más allá de la estrecha perspectiva temporal de los cargos políticos elegidos.¹⁶ Sin embargo esta combinación todavía tropezaría con otras limitaciones, basadas en la lógica de la democracia liberal, y de la estructura estatal administrativa.

Aunque resultan factibles ciertas combinaciones positivas de las instituciones existentes, argumentaré desde un punto de vista ecológico que sus combinaciones generalmente intensifican o agravan los errores. Así, el mercado capitalista anula la capacidad de maniobra de la democracia liberal y el estado administrativo, al descartar cualquier acción que conduzca a la disminución de la rentabilidad de los negocios empresariales. La democracia liberal y la burocracia administrativa tienen ambas una lógica de resolución de problemas que se origina en la desagregación analítica; la primera de acuerdo al interés y peso político relativo de determinados grupos sociales, la segunda en armonía con la mentalidad analítica de la burocracia estatal. Esta combinación mantiene la idea básica de la fragmentación, pero en la combinación de dos lógicas diferentes el resultado suele ser aún menos racional que de manera aislada, debido a que cada lógica triunfará en imprevisibles situaciones específicas. Por encima de todo, las instituciones existentes son manifestaciones de un tipo particular de racionalidad postilustración. Todas incorporan una orientación analítica instrumentalista para la resolución de los

problemas, y, por lo tanto, tienen la tendencia de confundir el desplazamiento de los problemas con la resolución de los problemas.

Este rechazo a la posibilidad de fructíferas combinaciones de las tres instituciones políticoeconómicas existentes, simplifica numerosos debates contemporáneos relacionados con la ecología y la política económica. Si imaginamos a las tres instituciones conformando un triángulo, la realidad enseña que numerosas discusiones suelen incluir el análisis de movimientos en ambas direcciones a lo largo de los tres lados del triángulo.

De esta manera, Paehlke favorece la reducción del espacio del estado burocrático y el incremento de la democracia liberal.¹⁷ Paehlke afirma, en contra de las proyecciones y recomendaciones de los ecologistas centralistas tales como Heilbroner y Ophuls, que la inclusión de temas ambientales en la agenda política en Canadá y Estados Unidos en los últimos veinte años ha sido acompañada de una mayor apertura en los debates políticos. Esta apertura adquirió la forma de debates públicos, de un activismo de ciertos grupos de interés, de una legislación relacionada a los «derechos de información», de cuestionamientos públicos y otros más. Heilbroner y Ophuls, por supuesto, desean actuar en la dirección exactamente opuesta en este lado del triángulo. Con una actitud displicente frente al caos y fragmentación de la democracia liberal, ellos no dudan en proponer más Leviatán. Ellos consideran que las propuestas de Paehlke exacerban la tragedia política de los comunes, a través de grupos de interés que reclaman más participación en los recursos ambientales. Paehlke por su parte cree que la energía para confrontar las crisis ecológicas resulta mejor canalizada por la movilización de la democracia participativa que por la administración

¹⁶ Robert Paehlke, *Lost Keys and no Engine: Re-Starting History in the Age of Ecology*. Ponencia presentada al Seminario de Ecología del Comité en la Economía Política de la Buena Sociedad, en la Reunión de la Asociación Americana de Ciencias Políticas, San Francisco, 1990. Ver también Alex Demirovic, «Ecological Crisis and the Future of Democracy», *Capitalism, Nature, Socialism*, 1(2), no. 2, verano 1989, p. 42.

¹⁷ Robert Paehlke «Democracy, Bureaucracy, and Environmentalism», *Environmental Ethics*, 10, 1988, p. 305.

burocrática centralizada, tal como muestran los momentos positivos en la historia de las mejoras del medio ambiente como resultado de la acción gubernamental.

Si consideramos el canje entre capitalismo y burocracia estatal, encontramos una vez más defensores del movimiento en una u otra dirección. Los reformistas reglamentistas desean reducir el poder discrecional de las agencias estatales e incrementar el rol de las estrategias de mercado con las tasas e impuestos y los mercados de derechos de contaminación. Algunos de estos reformistas querían la completa privatización de la autoridad encargada de la toma de decisiones, y por lo mismo encomendarían nuestro futuro económico al capitalismo. Existe, por supuesto, una antigua tradición que favorece el movimiento en la dirección exactamente opuesta. Los ecologistas hobbesianos tales como Heilbroner y Hardin no prefieren ni el mercado descentralizado ni la democracia liberal descentralizada. El movimiento conservacionista en Estados Unidos, a principios de este siglo, defendió el conocimiento y la profesionalidad científica como parte de la racionalidad estatal, con el objetivo de corregir las irracionalidades del capitalismo al determinar los patrones de uso de recursos. No obstante, una profesionalidad neutral en el interior de la burocracia administrativa resulta ser un mito bajo complejas condiciones ecológicas. Esto último resulta especialmente cierto cuando uno incluye las dimensiones morales y económicas en los indicados aspectos ecológicos.

En el tercer lado del triángulo los argumentos más predominantes son aquellos desarrollados por los grupos de interés ambientalistas mayoritarios, los cuales rechazan el capitalismo (aunque sólo en sus manifestaciones particulares y no en el conjunto del sistema) en favor de espacios de democracia liberal que permitan resolver los problemas ecológicos. En el lado opuesto a este argumento, se encuentran los teóricos

de la elección pública y los microeconomistas que combinan un discurso sobre la irracionalidad económica de la política que surge de los grupos de interés (especialmente en relación al dominio de intereses particulares sobre el bienestar social general) con un entusiasmo por la maximización del bienestar generada por la asignación del mercado, una vez que los derechos a la propiedad privada han sido bien definidos. En esta línea, una prominente escuela de pensamiento es la «nueva economía de recursos» que defiende la privatización de las tierras públicas, incluyendo los parques públicos del oeste norteamericano como alternativa al abuso de determinados grupos de interés.¹⁸ Estos grupos de interés, sean las «bestias» madereras o los industriales del turismo, se han beneficiado tanto del tesoro público como de los recursos ecológicos, a expensas del interés público, como consecuencia de sus triunfos en el juego político. Mi argumentación es que en este tercer lado del triángulo ambas perspectivas son correctas en su crítica respectiva, pero ninguna propone una alternativa significativa.

Por lo tanto, los debates relacionados al cambio de los mecanismos actuales se mueven en ambas direcciones, en cada uno de los lados del triángulo. Sin embargo, si cada uno de los tres vértices del triángulo constituyen espacios políticamente no viables o deseables, también lo son todos los puntos en su interior. La pregunta es cómo conseguir posibilidades estructurales más allá del triángulo.

CONTRADICCIÓN Y OPOSICIÓN

Los detractores del capitalismo, de la democracia liberal y del estado burocrático-administrativo ocasionalmente han tenido en su mente la revolución —aunque la revolución socialista tendría, por supuesto, que evitar los grandes fracasos ecológicos de los sistemas políticos «marxistas» pasados y presentes. Históricamente, las experiencias revolucionarias han tenido poca relación con las intenciones iniciales de los intelectuales revolucionarios.¹⁹ Las revoluciones triunfantes suelen desembocar en una poderosa burocracia estatal, resultado que sólo agradaría a los ecologistas que se inclinan por una centralización burocrática.

¹⁸ Ver, por ejemplo, John A. Baden y Donald Leal, editores, *The Yellowston Primer* (San Francisco, Pacific Research Institute for Public Policy, 1990).

¹⁹ Jack A. Goldstone, *Revolution: Theoretical, Comparative and Historical Perspectives* (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1986), pp., 207-317.

Antes que especular sobre las grandes transformaciones estructurales, resulta más oportuno determinar las posibilidades reales de cambio en aquellos espacios vulnerables de la economía política. Tales posibilidades existen, cuando hay oposición a las estructuras dominantes y a sus requerimientos o en aquellos casos donde la confusión y la contradicción de las estructuras dominantes las abre a las acciones en pro de un orden institucional alternativo. Cuando se dan ambas situaciones a la vez, los resultados son promisorios. De hecho cuando una existe, es más probable que la otra también exista. Como James O'Connor señala, las crisis político-económicas contemporáneas no pueden ser entendidas en términos de fuerzas estructurales impersonales, perspectiva descrita por los marxistas ortodoxos.²⁰ Por el contrario, tales crisis son parcialmente creadas por intervenciones humanas que son posibles a su vez por las contradicciones políticas y económicas.

Laclau y Mouffe proponen una perspectiva vagamente postmoderna y explícitamente postmarxista en el análisis de las fuentes y el significado contemporáneo de la resistencia política.²¹ Descartando la idea de que la clase social pueda constituirse en el eje central de resistencia, ellos reconocen que el capitalismo y el estado de bienestar keynesiano han generado nuevas formas de opresión acerca del género, el papel de los expertos, la ecología, la edad e inclusive la vida misma, por la cultura del exterminio derivada del complejo industrial militar en la era nuclear. Cada tipo de opresión ayuda a constituir diferentes sujetos políticos o sociales, de tal forma que no existe un único y privilegiado sujeto oprimido que reemplace al proletariado de la teoría marxista. Si la subjetividad resulta plural, la consecuencia debe ser una «democracia plural y radical»²² que contiene una variedad de luchas autodefinitorias, aunque Laclau y Mouffe también buscan la conexión o articulación de diferentes luchas.

Al insistir en la articulación, Laclau y Mouffe evitan la tendencia postmoderna de combinar una infinita variedad de discursos y formas de opresión con una posición escéptica respecto a las posibilidades de un cambio político positivo. Usualmente, el postmodernismo rechaza cualquier tipo de críticas argumentando que cualquier crítica deliberadamente estructurada, resulta en la realidad otra forma de discurso opresivo. Sin embargo, uno puede aceptar una pluralidad de lu-

chas sin suscribir la pasividad y el relativismo postmoderno. Claramente, tal pluralidad no conduce a una revolución social ni incluso a un movimiento social tácticamente unificado sino simplemente a espacios públicos autónomos. La esfera pública es el lugar en el cual los individuos intervienen en un discurso que involucra respeto mutuo, apertura, transparencia de las relaciones humanas, la creación de una verdadera opinión pública y, sobre todo, el enfrentamiento con el poder estatal.

No existe, por supuesto, garantía de que los movimientos sociales efectivamente internalizarán estas virtudes. No obstante, ciertos grupos ecologistas, feministas, activistas y pacifistas intentan lograr una toma de decisiones discursiva y consensuada. Ello contrasta con el estilo político jerárquico propio de las instituciones a las que se oponen.

La aceptación de la idea de la esfera pública como modelo y aspiración política, significa el rechazo al relativismo postmoderno. La referida idea implica la existencia de criterios, basados en una comunicación abierta y en lo que Habermas denominó racionalidad comunicativa, que trascienden los límites de las luchas particulares y los discursos referidos a contextos específicos. Sin embargo, tales criterios deben respetar la pluralidad enfatizada por Laclau y Mouffe. Habermas es acusado por sus críticos postmodernos, por ejemplo Lyotard, de no respetar tal diversidad e implícitamente de favorecer una situación homogénea en la cual los individuos alcanzarían los mismos fines u objetivos. Pero la racionalidad comunicativa implica respeto por las posiciones reflexivamente asumidas por otros, y es defendible como una norma de procedimiento en la interacción política sin imponer ningún estilo concreto de vida humana.²³

²⁰ James O'Connor, *The Meaning of Crisis: A Theoretical Introduction* (Oxford: Basil Blackwell, 1987), p. 148.

²¹ Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, *Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics* (London, Verso, 1985).

²² *Ibid.*, p. 167.

²³ Jürgen Habermas, *Communication and the Evolution of Society* (Boston: Beacon Press, 1979), p. 90; John Dryzek, *Discursive Democracy: Politics, Policy and Political Science* (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), p. 17.

Históricamente, la esfera pública más conocida la constituyó la naciente burguesía tal como positivamente lo señala Habermas.²⁴ Se caracterizó por la publicación de libros, periódicos, la formación de asociaciones políticas y discusiones informales en lugares públicos de reunión. La esfera pública resulta fundamental en la reconstrucción de la economía política en términos ecológicamente racionales. Existen síntomas positivos de que eso está ocurriendo en la realidad.

Esos espacios públicos están emergiendo y expandiéndose en el contexto de las diferentes luchas indicadas por Laclau y Mouffe. Otro impulso es el provocado por la contradicción y la confusión de la democracia liberal y el estado burocrático-administrativo.²⁵ Anteriormente he argumentado que la democracia liberal y el estado burocrático resultan ineptos cuando se trata de ecología, lo cual también puede ser cierto cuando ambas instituciones se enfrentan a otros nuevos movimientos sociales. Esta incapacidad es un factor que reorienta los movimientos hacia la esfera pública como un camino diferente para la acción política. En la medida que las instituciones tradicionales excluyen cierto tipo de demandas, esta alternativa de la esfera pública hace de la necesidad, virtud.

La naturaleza precisa de la crisis contemporánea de la democracia liberal y el estado burocrático-administrativo constituye materia de discusión, tal como lo confirma la variedad de recientes teorías.²⁶ Desde una perspectiva ecológica, tal vez el aspecto más importante de la crisis en las instituciones dominantes es su pretensión de racionalidad. En este contexto, O'Connor y Offe interpretan la crisis del estado de bienestar

keynesiano como un conflicto entre la legitimación y la acumulación.²⁷ Un estado de bienestar amplio resulta necesario para legitimar el orden político y económico capitalista, con el objetivo de apaciguar el descontento de todos aquellos que de otra forma sufrirían más de lo tolerable las vicisitudes del sistema. Igualmente, suaviza la anarquía capitalista y los ciclos económicos de auge y recesión. Pero al mismo tiempo, el estado de bienestar ha crecido hasta el punto de desalentar los incentivos que permiten funcionar al mercado. Ello sucede, por ejemplo, con la eliminación del miedo al desempleo para los trabajadores y la quiebra para los capitalistas. Dado este conflicto, el estado de bienestar keynesiano no funciona de manera racional, pues no puede establecerse una clara jerarquía o equilibrio de objetivos.

Las consecuencias de este tipo de crisis pueden involucrar un cambio hacia una administración económica corporativista en un esfuerzo para establecer un compromiso coherente, en términos de los objetivos de acumulación y legitimación relacionados al estado de bienestar. Sin embargo, el corporativismo aumentará los fallos inherentes del estado burocrático-administrativo y además perjudicará cualquier legitimidad democrática. La administración corporativista es por definición exclusiva y, por tanto, está en constante peligro de fracasar en el proceso de consolidar su legitimidad. En la medida en que se expande el corporativismo, los movimientos sociales son crecientemente marginados del estado hacia la esfera pública.

Durante la mayor parte de su historia los estados han tenido que competir con otros estados, mantener un orden interno y extraer los recursos financieros necesarios para costear sus actividades.²⁸ No obstante, con el tiempo estos tres imperativos han sido sutilmente transformados. Con el desarrollo del capitalismo ha resultado atractivo el fomento a la acumulación, como forma de garantizar el financiamiento estatal. Con la aparición de la democracia, el orden interno fue transformado en mecanismo de legitimación.

En la medida que los estados no puedan exportar o desplazar los problemas ecológicos, la conservación ambiental se convierte en un imperativo adicional que sólo puede incrementar las contradicciones del estado de bienestar keynesiano pues existe un claro conflicto con la acumulación capitalista

²⁴ Jürgen Habermas, *Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society* (Cambridge Mass.: MIT Press, 1989).

²⁵ También existe confusión en el sector privado, pero éste es vulnerable sólo indirectamente, a través de la presión sobre instituciones explícitamente políticas.

²⁶ Al respecto ver O'Connor, *The Meaning of Crisis*, op. cit. capítulo 3.

²⁷ James O'Connor, *The Fiscal Crisis of the State* (New York: St. Martin's Press, 1973); Claus Offe, *Contradictions of the Welfare State* (Cambridge Mass.: MIT Press, 1984).

²⁸ Theda Skocpol, *States and Social Revolutions* (Cambridge: Cambridge University Press, 1979)

—en la actualidad son bien conocidos los efectos ambientales destructivos del crecimiento económico. Resulta absurdo afirmar que se requiere de los frutos del crecimiento para costear la limpieza ecológica, debido a que todo crecimiento producirá efectos negativos sobre el ambiente, mientras que sólo una parte del excedente puede ser reorientada hacia la indicada limpieza.

Anteriormente he afirmado que ni el estado administrativo ni la democracia liberal pueden enfrentarse con los complejos problemas ecológicos. Con la evaporación de la racionalidad administrativa, y los constantes errores cometidos por los políticos atrapados en situaciones bastante complejas, las decisiones políticas no son rápidamente formuladas y legitimadas. Diversos investigadores de políticas estatales se lamentan de la aparente incapacidad de los sistemas políticos para distribuir las pérdidas, aun cuando el beneficio neto de una decisión promete resultar positivo.²⁹ La realidad muestra que aquellos potenciales perdedores, sean las agencias burocráticas o los intereses privados, pueden movilizarse para bloquear las propuestas.

Cuando aquellos que amenazan con vetar las mencionadas propuestas afirman representar a la sociedad civil y no a la burocracia o a las empresas, la respuesta de las instancias de poder ha sido buscar su propia legitimidad política mediante un modelo más participativo de democracia, e implícitamente reconociendo el fracaso del corporativismo. De esta manera, en el Reino Unido, el gobierno central no puede sin más construir centrales de energía nuclear: debe estructurar consultas públicas en las que todos los afectados o interesados pueden participar. En Canadá, Estados Unidos y algunos otros países ha habido un enorme crecimiento en la evaluación de los impactos sociales y ambientales, en los modelos de planificación participativa, en la legislación relacionada al «derecho a conocer», en las consultas públicas, y en las negociaciones ambientales y acuerdos voluntarios.

Dichos procesos son discursivos incipientes,³⁰ dado que representan aproximaciones imperfectas a ciertos ideales u objetivos de un discurso libre (y ocasionalmente violaciones groseras de estos ideales). Debido a que están asociados con el estado, no constituyen esferas públicas autónomas. Sin embargo, aunque distorsionadas, esas nuevas prácticas indican

que las decisiones políticas legítimas ahora requieren no sólo el conocimiento técnico y además el apoyo de una autoridad constitucional, sino también una participación informada de todas las partes implicadas.

LOS DISEÑOS DISCURSIVOS Y LA ESFERA PÚBLICA

Las prácticas discursivas son usualmente auspiciadas por aquellos que ocupan posiciones en la estructura de poder político. Congresistas, agencias gubernamentales, fundaciones, y corporaciones han buscado o patrocinado la negociación en temas tan variados como la política forestal, la producción y la utilización de carbón, los proyectos hidráulicos y la contaminación atmosférica regional. Ocasionalmente, dichas prácticas son ordenadas y reguladas por la legislación existente: por ejemplo, la ley nacional de política ambiental de los Estados Unidos especifica cuando se requiere de los comentarios de la opinión pública respecto a informes de impacto ambiental. Obviamente, tales prácticas discursivas no están diseñadas con el objetivo de debilitar el sistema dominante. En realidad, tienen como objetivo cooptar a individuos potencialmente problemáticos y críticos,³¹ o funcionan como una pantalla para ocultar decisiones alcanzadas por medios políticos convencionales.³² No obstante, la misma idea de que estos ejercicios requieren muchos participantes e implican amplias discusiones significa que no se someten a la autoridad profesional o a objetivos preestablecidos. En última instancia, la demanda de legitimidad de los incipientes ejercicios discursivos no se sus-

²⁹ Ver, por ejemplo, Lester T. C. Thurow, *The Zero-Sum Society: Distribution and the Possibilities for Economic Change* (New York: Basic Books, 1980).

³⁰ John S. Dryzek, «Discursive Designs: Critical theory and Political Institutions», *American Journal of Political Science*, 1987.

³¹ Douglas J. Amy, *The Politics of Environmental Mediation* (New York: Columbia University Press, 1987).

³² Ray Kemp, «Planning, Public Hearings and the Politics of Discourse», en John Forester, editor, *Critical Theory and Public Life* (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1985).

tenta en el conocimiento técnico o en la autoridad constitucional, sino en los ideales del discurso autónomo (ética comunicativa), en el cual el único poder legítimo es el del mejor argumento.³³ Por tanto, si los individuos del gobierno y de las empresas participan en tales ejercicios y proceden a engañar, manipular, negar información, o establecer reglas restrictivas, podrían ser rápidamente desenmascarados. Aunque ello no fuese su intención, esas prácticas discursivas pueden dar ideas que debilitan aun más la lógica administrativa y la desigual distribución del poder en una democracia liberal.³⁴

Los diseños discursivos incipientes también constituyen una apertura política entre el estado y un espacio público obviamente más autónomo y auténtico, reconociendo las autoridades gubernamentales que el conocimiento técnico respaldado por la autoridad constitucional estatal ya resulta insuficiente para elaborar una política efectiva, y que el aporte de la sociedad civil resulta necesario.³⁵ En dicha apertura, el estilo discursivo de la esfera pública provoca un continuo debilitamiento de aquellos objetivos estatales supuestamente no polémicos y de aparente neutralidad técnica. De manera alternativa, estas prácticas discursivas podrían ser utilizadas para neutralizar y cooptar a individuos de la esfera pública que son revoltosos. En sí mismos, los diseños discursivos poseen un potencial ambiguo para constituir y facilitar procesos de transformación política.³⁶ Las prácticas discursivas orientadas

hacia políticas concretas que no son auspiciadas por el estado (la Comisión de Evaluación Indígena de Alaska³⁷ poseen un carácter menos ambiguo, pero resultan excepcionales.

La mencionada ambigüedad resalta la necesidad de construir y mantener espacios públicos autónomos, enfrentados con el estado a cargo de nuevos movimientos sociales relacionados con la paz, comunidad, ecología, feminismo, espacio urbano y otros. Tales movimientos podrían ser positivamente caracterizados en términos de un autolimitado radicalismo (debido a que no buscan una cuota del poder estatal, ni su democratización) y de una preocupación por su propia identidad.³⁸ Igualmente, pueden ser definidos negativamente en términos de su lugar confuso en la tradicional política de clases. Permanece aún en discusión el estilo de relación que deben tener estos movimientos sociales con el poder establecido. Los ambientalistas que desean negociar son criticados por aquellos que prefieren una postura más radical. Este tipo de debate caracteriza al Partido Verde Alemán, cuyo sector «realista» desea establecer compromisos dentro del sistema político de partidos convencional, mientras que los «fundamentalistas» prefieren la acción directa, las calles y la esfera pública. En los grupos verdes norteamericanos, la hostilidad hacia los procesos de política convencional ha impedido que este movimiento forme un partido político. Claramente, conceptos tales como «política» y «democracia» son términos cuestionados dentro de los nuevos movimientos sociales pues existen desacuerdos internos sobre los tipos de práctica política y democrática apropiados. Sin embargo, el mismo hecho de que tales temas sean discutidos por los nuevos movimientos sociales indica que su racionalidad comunicativa es mayor que en la política convencional.

No existe necesidad para un cierre prematuro de tales debates en nombre de la unidad. Tal como Torgerson indica, una oposición radical a cualquier tipo de negociación con el estado sólo tiene sentido en términos de una total unidad táctica en el movimiento ambiental —como la imagen que se opone estrictamente en el espejo a la mentalidad administrativa.³⁹ Tal visión monolítica resulta ser tan obsoleta como las mismas estructuras estatales administrativas.

El emergente espacio público contemporáneo florece sobre la base de la diversidad. Un aspecto de esta diversidad,

³³ Douglas Torgerson, «Limits of the Administrative Mind: the Problem of Defining Environmental Problems», en Paehlke y Torgerson, editores, *Managing Leviathan*, op. cit., p.144.

³⁴ Robert V. Bartlett, «Ecological Reason in Administration: Environmental Impact Assessment and Administrative Theory», en Paehlke y Torgerson, editores, *Managing Leviathan*, op. cit., 1982. Ver también Michael Gismondi y Mary Richardson, «Discourse and Power in Environmental Politics: Public Hearings on a Bleached Kraft Pulp Mill in Alberta, Canada», *CNS*, 2(3), no. 8, October, 1991.

³⁵ Torgerson, *Limits of the Administrative Mind*, op. cit., p. 142.

³⁶ Dryzek, *Discursive Democracy*, op. cit., capítulo 4.

³⁷ Thomas Berger. *Village Journey: The Report of the Alaska Native Review Commission* (New York: Hill and Wang, 1985).

³⁸ Jean Cohen «Strategy or Identity: New Theoretical Paradigms and Contemporary Social Movements», *Social Research*, 52, 1985.

³⁹ Torgerson, *Limits of the Administrative Mind*, op. cit. p. 144.

que inclusive debe ser bienvenido, es el rechazo por parte de algunos ambientalistas a ser asociados con los incipientes diseños discursivos. Tal como frecuentemente señala David Brower, el surgimiento de ecologistas que no buscan el compromiso, como los de «Primero la Tierra» (*Earth First*), convierte a ciertos ecologistas como él mismo en razonables. De tal forma que los ambientalistas que no buscan el compromiso otorgan mayor credibilidad a aquellos que lo buscan, y hace que éstos sean más capaces de subvertir la lógica de la burocracia administrativa y de la democracia liberal.

La compleja relación entre la democracia discursiva y la democracia liberal puede entonces ser aclarada. La continua búsqueda de una legitimidad por parte de la democracia liberal puede conducir a su modificación discursiva, y ello puede constituir uno de los mejores argumentos a su favor. No obstante, al mismo tiempo la democracia liberal limita estrictamente el grado en que los incipientes ejercicios discursivos afectan las políticas públicas, las cuales permanecen subordinadas al imperativo de la acumulación capitalista. Dentro de estos límites, puede florecer el reto de la esfera pública al estado democrático liberal. Aunque puede ocurrir un simple enfrentamiento entre la democracia discursiva y la democracia liberal, existe también un terreno más ambiguo donde ambas confluyen. El estado democrático liberal puede cooptar las formas discursivas. Igualmente, sin embargo, la democracia discursiva puede erosionar el privilegio de los intereses privados de la democracia liberal.

En resumen, la propuesta que surge es la democratización en todos los niveles posibles: los espacios públicos autónomos constituidos por los nuevos movimientos sociales, los límites del estado donde la legitimidad es buscada a través de nuevos ejercicios discursivos y aun dentro del estado, por ejemplo, cuando se producen las evaluaciones del impacto ambiental. Esta propuesta es similar o paralela a la de los teóricos de la democracia participativa, tales como Poulantzas y Gould, quienes reconociendo la persistencia del estado, la burocracia y la empresa privada, recomiendan la democratización de la sociedad civil y el estado.⁴⁰ Poulantzas apoya este programa en parte para proteger y construir sobre la base de aquellos aspectos rescatables de la democracia liberal (como la competencia entre centros de

poder), antes que excluirlos en nombre de alguna deseada democracia de masas.

Deseo insistir en que la democracia discursiva no está necesariamente vinculada a la agenda descentralizadora de numerosos ambientalistas. A igualdad de condiciones, lo pequeño puede realmente ser hermoso en política y en la organización económica. Sin embargo, muchos problemas ambientales trascienden el nivel local, y algunos de los más espinosos son globales. Se requiere de instituciones de gran escala para afrontar tales dificultades. No existe razón para que dichas instituciones no sean diseñadas de manera discursiva, aun cuando la participación ilimitada se convierta en un asunto más problemático, aunque no insoluble, en la medida en que aumenta la escala institucional. Hay experiencias discursivas institucionales en el interior del sistema internacional, como son las esferas públicas internacionales, constituidas por verdes, pacifistas, activistas de derechos humanos, pueblos indígenas y otros.⁴¹ Indudablemente resulta arriesgado, construir la democracia tan ampliamente. Si se flirtea con las empresas y con el estado existe el peligro de la cooptación y la subversión. La democracia industrial es particularmente susceptible a este problema. Por lo mismo, se requiere del desarrollo de esferas públicas no comprometidas con el poder y que tengan capacidad de mantener su autonomía.

He presentado la tesis de que tanto el orden institucional capitalista, incapaz de abordar cuestiones ecológicas, como también la burocracia estatal estimulada por la democracia liberal, resultan susceptibles a un cambio hacia una alternativa democrática discursiva de carácter más abierto. Carezco de un proyecto específico para este tipo de gobierno y sociedad; más aún, la concreción de tal proyecto no resulta conveniente — implicaría fijar límites a la experimentación institucional, lo cual estaría reñido con el espíritu de los diseños discursivos y de la democratización discursiva que vengo reclamando. Uno de los aspectos más atractivos de tales experimentos es que el

⁴⁰ Nicos Poulantzas, *State, Power and Socialism* (Londres, Verso, 1980); Carol C. Gould, *Rethinking Democracy* (Cambridge: Cambridge University Press, 1988).

⁴¹ Dryzek, *Discursive Democracy*, op. cit., capítulo 5.

cambio institucional esta siempre presente. Una de las características definitorias de los nuevos movimientos sociales es su permanente preocupación con su propia identidad y estructura interna de poder.⁴² Cualquier institución puede tener este tipo de mentalidad abierta en la medida en que internalice cánones de comunicación no represivos, pues no hay razón para excluir los argumentos convincentes que lleven a acciones transformadoras.

LA RACIONALIDAD ECOLÓGICA DE LA POLÍTICA DISCURSIVA

Permanece una importante pregunta: ¿Hasta qué punto el proceso de democratización discursiva que he reseñado significaría una realización de los valores ecológicos? ¿No es concebible que los individuos involucrados en los proyectos discursivos se inclinen de manera competente y reflexiva a restar importancia a los problemas ambientales y prefieran la prosperidad económica o la integración social? ¿No reflejaría ello una predisposición cultural que todavía existe a considerar al ser humano como dominante sobre la naturaleza? En este contexto resalta la argumentación del propio Habermas, quien propone formas de interacción comunicativa incorporadas en los diseños discursivos y en la esfera pública, para impedir formas de interacción entre las personas que se asemejen a nuestra relación con el mundo natural.⁴³ Habermas adscribe este último tipo de relación al espacio de la racionalidad instrumental analítica, y por tanto al estado burocrático administrativo.⁴⁴

Sin embargo, la democratización discursiva resulta ecoló-

gicamente racional particularmente cuando se argumenta desde los siguientes puntos de vista. Las estrategias discursivas *sensibilizan* a la población respecto a los síntomas de desequilibrio en la interacción entre la humanidad y la naturaleza, pues la condición fundamental de una amplia y efectiva participación implica que una extensa variedad de voces pueden ser escuchadas en defensa de un conjunto diverso de preocupaciones. En la medida en que la comunicación resulta libre, dichas voces y preocupaciones no resultarán distorsionadas por la ideología. Tampoco serán moderadas o distorsionadas debido a razones de estrategia política, como suele ocurrir en democracias liberales cuando grupos de interés ambientalista deben presentar cada tema en términos de un escenario catastrófico. Tampoco serán limitadas por el sistema legal de admisibilidad o no admisibilidad de ciertos tipos de argumentos. Por ejemplo, de acuerdo con la Ley Nacional de Política Ambiental de Estados Unidos, las cortes judiciales aceptan demandas si los estudios de impacto ambiental están formalmente mal hechos pero prescinden de los méritos ecológicos intrínsecos de las demandas.

La sensibilidad respecto a una variedad de intereses y temas se relaciona directamente con la cuestión de la *complejidad*. Los problemas ecológicos son complejos, abarcan a una amplia gama de elementos e interacciones muy variables. Cuando se suma un número ilimitado y variado de opiniones a los debates, podría parecer que se intensifica la complejidad de los problemas. Sin embargo, eso ocurrirá sólo si se da un estilo estratégico de interacción política. En la medida en que los actores de las interacciones estén comprometidos con los principios de la racionalidad comunicativa, y, por lo tanto, se muestren deseosos de renunciar al referido estilo estratégico, al engaño, la distorsión y la manipulación, entonces resulta posible un adecuado entendimiento entre individuos que representan las diversas perspectivas sobre problemas complejos. La interacción entre las diversas facetas de un problema que es lo que la complejidad significa, puede ser enfrentada por un estilo conjunto y colectivo de resolver problemas, por parte de los individuos implicados. Obviamente, la racionalidad comunicativa no es una meta absoluta. Sin embargo, así como fácilmente se puede identificar sistemáticamente comunicaciones distorsionadas en foros discursivos,⁴⁵

⁴² Cohen, «Strategy or Identity», *op. cit.*

⁴³ Jürgen Habermas, «Reply to My Critics», en David Held y John B. Thompson, editores, *Habermas: Critical Debates* (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1982), págs. 243-245.

⁴⁴ En referencia a casos de política discursiva relacionados a la temática de la biosfera, presentados de una forma no instrumental, ver Demirovic, «Ecological Crisis», *op. cit.*; John S. Dryzek, «Green Reason: Communicative Ethics for the Biosphere», *Environmental Ethics*, 12, 1990.

⁴⁵ Kemp, «Planning, Public Hearings», *op. cit.*

también se pueden aplaudir casos que se aproximan más cercanamente a dicho ideal. Posiblemente, los ejemplos más frecuentemente citados constituyen las consultas públicas bajo el juez canadiense Thomas Berger, realizadas fuera de la instancia judicial. Una primera, auspiciada muy a su pesar por el gobierno canadiense, fue instrumental para bloquear la construcción de gasoductos y oleoductos del Ártico canadiense a los mercados del Sur.⁴⁶ Una segunda, constituida como una instancia pública explícitamente autónoma de la intervención gubernamental, se enfrentó el caso de los indígenas de Alaska Nativa, luego de la desastrosa legislación relacionada con sus reclamos (Alaska Native Claims Settlement Act).⁴⁷ En ambos casos, Berger creó un fórum ambulante con el objetivo de articular la información sobre los problemas y las necesidades de la población nativa del norte, proporcionando no sólo una plataforma sino también conocimiento profesional, financiamiento, intercambio de información y argumentos. El producto en cada caso fue la elaboración de un plan coherente para tratar con una situación compleja y potencialmente conflictiva.

Resulta posible este tipo de desenlaces en los diseños discursivos, a pesar de las dificultades asociadas con una amplia y extensa participación. Este resultado no resulta imaginable en una división jerárquica del trabajo dentro de la burocracia administrativa. Tampoco resulta concebible en una estrategia negociadora típica de un estilo policéntrico de resolución de problemas de la democracia liberal. Mientras en el primer caso únicamente se produce un desplazamiento de los problemas, el segundo sólo puede generar una reproducción del caos o un compromiso arbitrario.

La interacción discursiva, no establece límites a los tipos de valores e intereses que son expresados. Sin embargo, los intereses que son *generalizables* a todas las partes implicadas poseen más poder persuasivo que aquellos que se restringen a un sector específico. Cualquier tipo de intereses particulares que son explicitados debe sobrevivir el examen discursivo. En un contexto ecológico, los intereses generales usualmente se referirán a los bienes públicos (en el sentido microeconómico) o a la calidad de los recursos de la propiedad colectiva tales como la pesca o los ecosistemas. Por lo tanto, la interacción comunicativa de los diseños discursivos constituye un medio

descentralizado para proporcionar bienes públicos o para impedir la degradación de recursos colectivos. El mercado no posee tal mecanismo, y además la democracia liberal promueve y responde a determinados intereses particulares, denigrando el concepto de un interés público que sea mayor que la suma irreflexiva de intereses particulares. La burocracia estatal puede de manera coercitiva proporcionar los bienes públicos o regular la propiedad colectiva pero tan sólo a un alto precio de ineffectividad frente a las cambiantes situaciones ecológicas, de descoordinación en la resolución de problemas, sin mencionar además el debilitamiento de la democracia.

He dicho poco sobre la organización económica. Sin embargo, resulta clara una implicación: debe ubicarse la organización económica bajo el control político de la democracia discursiva. La manera exacta como podría ser logrado sin la presencia de la burocracia estatal sigue siendo un tema no resuelto, especialmente problemático por la capacidad de los sistemas de mercado y capitalista de castigar las decisiones que tropiezan con la lógica de acumulación capitalista.

Mi argumentación sobre la racionalidad ecológica y la conveniencia política de la democracia discursiva resultan válidas en la medida en que el discurso permite escrutar y penetrar las estructuras culturales e ideológicas. Por supuesto, la ideología y la cultura son muy potentes e incluso pueden determinar el propio contenido de los problemas ecológicos. La «naturaleza» en sí misma puede ser una construcción social percibiéndose de manera muy diferente entre los poetas románticos, los social-darwinistas, las ecofeministas, los ejecutivos de Madison Avenue, los ecologistas profundos, los ecologistas sociales y Weyerhaeuser. El discurso racional puede indagar sobre tales construcciones y su aplicación práctica. Posiblemente no existe una única y verdadera concepción de la naturaleza a ser descubierta, pero por lo menos las distorsiones ideológicas pueden ser destruidas. En este caso mucho

⁴⁶ Thomas R. Berger. Northern Frontier, Northern Homeland: The report of the MacKenzie Valley Pipeline Inquiry (Toronto: James Lorner, 1979).

⁴⁷ Berger, Village Journey, op. cit.

depende del creciente potencial de la competencia comunicativa derivada de la modernidad.⁴⁸

En síntesis, la política ecológica que he dibujado en este

artículo es, discursiva y democrática, y claramente muy diferente del habitual estilo dominante de la vida política y económica. Sea que se exprese en el mercado capitalista, la burocracia estatal o la democracia liberal, el estilo dominante es esencialmente irracional en un contexto ecológico. La contradicción y confusión que esta irracionalidad genera, abre posibilidades para un estilo de democracia política ecológicamente más apropiado, el cual, sin embargo, no podrá ser alcanzado sin una lucha y esfuerzo consciente.

⁴⁸ Jürgen Habermas, *Theory of Communicative Action* (Boston Beacon Press, 1984)

<p>ÉCOLOGIE ET POLITIQUE</p> <p>ALIMENTATION ET ÉCOLOGIE</p> <p>SCIENCE CULTURE SOCIÉTÉ</p>	NUMÉRO 23 AUTOMNE 1998	SOMMAIRE DOSSIER ALIMENTATION, ÉCOLOGIE ET AGRICULTURE	
		Alimentation, écologie, société de consommation Isabel Do Carmo 5 Consommation alimentaire et modes de vie en France 1950-1998 Annie Hubert 13 L'alimentation au Portugal, le changement Manuela Valaglio 25 L'alimentation des espagnols à partir de l'anthropologie de l'Espagne, terre de contraste Isabel Turmo 39 Qui va nourrir la Chine? Lester Brown 51 Les organisations professionnelles agricoles et l'environnement Nathalie Duclos 77 Le bonheur n'est plus dans les prés roses Ignacy Sachs 95 Les politiques environnementales en milieu urbain Le cas de Curitiba (Brésil) Marcio de Oliveira 101	
		SOURCES	121 Patrick Geddes et sa critique de l'économie Joan Martinez Alier
		REPÈRES/ACTUALITÉS	135 Les hors sols en Auvergne ou les scientifiques roulés dans la fiente M.C. Dupré 136 Elevage porcin et humanisme au pays des Grands Cases Estelle Deléage 137 <i>Le rationnel et le raisonnable, l'économie, l'emploi et l'environnement</i> , Jean-Paul Maréchal Jean-Paul Deléage 139 <i>Les violences paysannes sous la V^e République</i> , Nathalie Duclos 142 <i>Les dangers du marché planétaire</i> , Serge Larouche Jean-Paul Maréchal 145 Index des articles publiés dans <i>Écologie et Politique</i> du numéro 1 (janvier 1992) au numéro 22 (mai 1998)